

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1993/NGO/5  
30 de julio de 1993

Original: ESPAÑOL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones  
y Protección a las Minorías  
45º período de sesiones  
Tema 6 del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES  
FUNDAMENTALES, INCLUSO LA POLITICA DE DISCRIMINACION RACIAL Y DE  
SEGREGACION Y LA POLITICA DE APARTHEID, EN TODOS LOS PAISES Y EN  
PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y  
DEPENDIENTES: INFORME DE LA SUBCOMISION CONFORME  
A LA RESOLUCION 8 (XXIII) DE LA COMISION  
DE DERECHOS HUMANOS

Comunicación escrita presentada por la Federación Internacional  
Terre des Hommes, organización no gubernamental reconocida  
como entidad consultiva de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición que se  
distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico  
y Social.

[30 de julio de 1993]

#### Situación en Guatemala

1. Durante el período considerado, continuó en Guatemala la violación grave, constante y sistemática de los derechos humanos, situación que ha sido motivo de preocupación de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en años anteriores, la cual se ha reflejado en importantes resoluciones cuyas recomendaciones aún hoy no se cumplen.

2. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, hasta señalar algunos indicadores que muestran el deterioro de los mismos en los últimos tiempos; en 1991, el PNUD registró a Guatemala en el último lugar en "desarrollo humano" en el área centroamericana (por debajo de Honduras y Nicaragua), en tanto que en 1992 la pobreza llegó a afectar al 84% de la población. La población del área rural es la que más se ve afectada por la pobreza: 96% de la población vive en esta situación y de ésta, 83% vive en pobreza extrema. Allí se encuentran los índices más altos de analfabetismo (que llega a 95% entre la población femenina de departamentos predominantemente indígenas), desnutrición y mortalidad infantiles, salarios de hambre que sólo permiten sobrevivir, jornadas extenuantes de trabajo sin posibilidad de organizarse sin riesgos para defenderse.

3. Por otro lado, los devastadores efectos de la política de masacre y tierra arrasada aplicada en los tempranos ochenta, que destruyó el mercado interno, aún se dejan sentir en el área rural, debido a la inexistencia de programas gubernamentales eficientes que traten de revitalizar la economía, mejorando las condiciones de vida de la población que fue afectada por la represión.

4. Las políticas de ajuste estructural, dictadas por los organismos financieros internacionales, por otro lado, han implicado una creciente depauperización para la mayoría de la población, que es quien en realidad está pagando los costos de dicho ajuste, con aún más altas tasas de desempleo (41% entre la población en edad de trabajar, además de un 34% de subempleo), empeoramiento de los ya precarios servicios públicos, entre otros problemas.

5. Los derechos civiles y políticos y entre ellos los derechos fundamentales (vida, libertad, integridad física y justicia) siguen siendo violados en formas diversas. Así, entre el 10 de agosto de 1992 y el 13 de julio de 1993 han continuado las ejecuciones extrajudiciales individuales (224 víctimas), las colectivas o masacres (42 víctimas en 9 hechos), las desapariciones (43 personas en total, de las cuales en 24 casos aparecieron los cadáveres en tanto 19 continúan desaparecidas) mientras los atentados contra la vida y las amenazas de muerte están generando un clima de temor entre la población.

6. Todas estas formas violatorias de los derechos humanos afectan principalmente a los sectores populares y aquellos grupos organizados en torno a la defensa de los derechos humanos o a reivindicaciones económicas, tales como el Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junan (CERJ), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Consejo Nacional de Desplazados (CONDEG), cooperativas y organizaciones no gubernamentales tanto del campo como de la ciudad.

7. Especial atención merecen los ataques a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, cuyos miembros han sido amenazados o atacados directamente con cada vez mayor fuerza en los últimos meses. Así, en marzo de 1993, el entonces Ministro de la Defensa general José Domingo García Samayoa, acusó a las mujeres miembros de la CONAVIGUA de ser miembros de la insurgencia. A finales de abril, en reuniones públicas realizadas en Sololá, elementos castrenses acusaron a miembros de la

Cooperativa Indígena para el Desarrollo Integral (COINDI) de ser instrumentos de la insurgencia, amenazándolos de muerte a través de cartas anónimas hechas llegar a la oficina de dicha institución.

8. Lamentablemente, los ataques contra las organizaciones populares no han cesado después de la designación como Presidente del ex Procurador de los Derechos Humanos, licenciado Ramiro de León Carpio; en el marco de la búsqueda de los hechores del asesinato del político Jorge Carpio Nicolle, el Sr. Tomás López y López, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC) fue detenido-desaparecido por elementos de la Policía Nacional y hombres desconocidos vestidos de civil, en la aldea Chontalá, Chichicastenango, El Quiché. Al explicar la ineficacia de las investigaciones sobre el hecho arriba señalado, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de El Quiché han afirmado que se debe a que "los hechores son miembros de grupos de derechos humanos y si procedemos contra ellos nos acusan de violar los derechos humanos", como si tales organizaciones estuvieran integradas por delincuentes.

9. Un sector particularmente afectado es el de los medios de comunicación. Numerosos periodistas fueron atacados directamente o amenazados en el período considerado, en tanto varios artefactos explosivos fueron colocados en las oficinas de varios periódicos o radioperiódicos.

10. En momentos de particular convulsión social, toda la población se convierte en blanco de la represión, a través de actos de terrorismo como explosión de artefactos en lugares públicos o viviendas particulares o llamadas telefónicas previniendo sobre amenazas de dichas explosiones, así como ataques armados contra grupos de personas en las calles, etc.

11. Como si fuera poco, otro derecho fundamental, el derecho a la justicia, también es violado en el país con la existencia de la impunidad. En casos como el de la ejecución extrajudicial del ciudadano norteamericano Michael Devine, cuyo proceso fue impulsado por la Embajada de Estados Unidos, se llegó a la condena del responsable, el capitán Hugo Contreras, que luego huyó "inexplicablemente" de la cárcel de una base militar. Sin embargo, tanto el informe circunstanciado de la Procuraduría de Derechos Humanos como los de organizaciones no gubernamentales demuestran que en los archivos de los juzgados del país permanecen miles de casos abiertos, todos "sobre averiguar", en los cuales muy probablemente nunca se conocerá a los hechores.

12. Las operaciones del ejército de Guatemala, en abierta violación de las normas del derecho internacional humanitario continuaron afectando a las comunidades de Población en Resistencia (CPR), que han sufrido reiterados bombardeos, actos que forzaron desplazamiento de población hacia México, en noviembre de 1992, y que se acrecentaron en forma alarmante en abril de 1993.

13. El trato inhumano que las fuerzas armadas dan a los combatientes que han sido capturados se dio a conocer a la comunidad internacional mediante los testimonios de dos jóvenes que lograron escapar de las cárceles clandestinas, en los cuales se dieron a conocer los nombres de cerca de 25 combatientes que permanecen, muchos de ellos sometidos a torturas, en manos del ejército sin

que éste cumpla con las obligaciones contraídas al firmar los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II.

14. En marzo de 1992, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó recursos de exhibición personal en favor de estas personas, que serían los primeros prisioneros de guerra reconocidos durante los treinta años de existencia del conflicto armado no internacional, los cuales fueron declarados sin lugar, sin que hasta la fecha se conozcan los resultados de las pesquisas iniciadas por el organismo judicial.

15. Tenemos, entonces, una situación en la cual se viola no sólo el derecho de los derechos humanos, que el Estado guatemalteco debe respetar en virtud de su propia constitución política y por haber firmado numerosos convenios internacionales sino también el derecho internacional humanitario aplicable en tiempo de conflicto armado. En tanto, en las negociaciones para la solución política del conflicto armado no internacional entre Gobierno/ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) no se logra aún la firma del acuerdo global de derechos humanos, porque justamente alrededor de este tema se estancaron las conversaciones, que también fueron afectadas por la crisis política de finales de mayo.

16. La designación del ex Procurador de Derechos Humanos, licenciado Ramiro de León Carpio como Presidente de Guatemala ha despertado grandes expectativas en la comunidad internacional, que confía en que durante su gestión se modificará sustancialmente la situación de los derechos humanos en este país.

17. Al tenor de estas expectativas, los sectores populares aglutinados en el Foro Multisectorial Social demandan al nuevo Presidente que mantenga la actitud defensora de los mismos que tuvo en su desempeño como Procurador de los Derechos Humanos y que dentro de su política gubernamental disponga acciones encaminadas a resolver cuestiones fundamentales de esta problemática, cuya solución pasa necesariamente por la desmilitarización. Entre las demandas populares están, entre otras, la disolución de las patrullas civiles, la implementación de medidas para enfrentar la pobreza, el cese de la impunidad y la continuación de las negociaciones entre Gobierno/ejército y URNG para la solución política del conflicto armado.

-----